

“

Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión” es una de las frases más significativas de nuestro Himno Nacional. Sin duda, Chile ha sido un refugio para la opresión en América Latina,

donde miles de venezolanos, cubanos y bolivianos han encontrado asilo y cobijo, luego de huir de las dictaduras socialistas, disfrazadas de democracia, que imperan en esas naciones y donde arbitrariamente se persigue y sanciona la disidencia, se aplaca la libertad y se oprime al que piensa distinto.

Pero hace años que Chile dejó de ser un destino exclusivamente reservado para quienes huyen de la opresión. Especial-

El exilio contra la invasión

Por **Cristián Valenzuela**



mente, en la última década, Chile se ha convertido en el lugar predilecto de bandas de delincuentes, narcotraficantes y avezados miembros del crimen organizado extranjero; también, de falsos turistas que viajan al país declarando una visita temporal, pero con la intención de establecerse definitivamente. Por último, y no livianamente, Chile se ha convertido en la estación final de un largo viaje, mediado muchas veces por bandas organizadas de tráfico de personas, que emprenden inmigrantes ilegales que buscan concretar en nuestro país el sueño que en sus propios países no fueron capaces de materializar.

La primera ola vino de la mano de los vuelos chárter que, bajo la complacencia de Michelle Bachelet y Hernando Muñoz, aterrizaron en Chile desde Haití. Fueron más de 180 mil haitianos los que llegaron al país entre 2017 y 2018, y el gobierno de la época no hizo nada para evitarlo o controlarlo. La segunda ola también comenzó en 2017 y se extiende hasta nuestros días, y corresponde a la emigración desde Venezuela. Son más de 530 mil personas las que han llegado a Chile, la mayoría en forma irregular, y que han

cambiado definitivamente la realidad de los extranjeros en nuestro país.

En total, se proyecta que a fines de 2024 en Chile habrá más de dos millones de extranjeros, con cientos de miles viviendo en forma irregular producto de su entrada por pasos clandestinos a nuestro país. Una cifra que representa más de un 10% de la población total de Chile, significativamente mayor al 2,3% que representaban los extranjeros hace 10 años.

La decisión de regularizar masivamente –o de manera acotada, como eufemísticamente señalan en el gobierno– es la señal definitiva que necesitaban cientos de miles de extranjeros ilegales para venirse a Chile en los próximos meses. Luego de un proceso de empadronamiento biométrico, que supuestamente buscaba equiparar las condiciones para percibir beneficios sociales entre extranjeros y chilenos, el gobierno ha definido avanzar en el asentamiento definitivo de miles de personas que entraron de manera ilegal. ¿Cuál es la señal? Vengan a Chile, porque las fronteras están abiertas y, pese a los ingresos clandestinos, su estadía estará asegurada para siempre.

El contexto internacional no ayuda mucho. A principios de enero, Nicolás Maduro consolidará su dictadura y cientos de miles de venezolanos se verán forzados a emigrar. A fines de enero, Donald Trump asumirá en Estados Unidos e implementará una política de expulsión masiva de extranjeros ilegales, muchos de ellos que usaron a Chile como una estación intermedia para llegar a Norteamérica. ¿Qué países buscarán esas personas para fijar su residencia definitiva? ¿Uno que busca restringir el ingreso de inmigrantes ilegales o uno que da todas las señales posibles para recibir estas oleadas migratorias, con fronteras protegidas y con procesos de regularización que terminan blanqueando los ingresos clandestinos?

Chile necesita un cambio radical para enfrentar la nueva ola de inmigración ilegal que se viene. Pero no es una ola cualquiera, sino que por los cambios que Chile ha vivido en su composición demográfica se consolidará una verdadera invasión de inmigrantes ilegales a nuestro país, y la crisis económica y de seguridad solo terminará profundizándose.

No solo necesitamos cerrar de verdad la frontera a la inmigración ilegal, sino que, además, hay que realizar un proceso de expulsión –y no regularización– masiva para recuperar nuestro país y comenzar a reconstruirlo. Ello implicará, por lo pronto, la extensión de las zanjas, la eventual construcción de muros cerca de los pasos fronterizos y la habilitación de centros de detención temporal, para forzar la salida voluntaria de quienes entraron ilegalmente al país.

Si Chile quiere tener un futuro y reencontrarse al desarrollo, necesitamos pasar de ser el asilo contra la opresión, a convertirnos en uno donde se requiere el exilio de los inmigrantes ilegales para frenar la invasión.